

# abrir las puertas a la participación



**A**l finalizar el año el gobierno del Presidente Kirchner goza de un amplio consenso social. No es poco si se recuerda que hace sólo dos años parecía que la consigna "que se vayan todos" era la voluntad de dar vuelta la página para empezar otra historia. Pero está visto que la realidad política es más compleja que una consigna. ¿Qué de realidad y qué de sueños tenía aquella consigna? ¿Es que realmente todo sigue igual? ¿En qué aspectos empezó otra historia y en cuáles las cuentas siguen pendientes? Por cierto que el análisis excede respuestas simples. Pero algunas reflexiones pueden hacerse al terminar el 2003.

Cuando al inicio de su mandato el Presidente Kirchner expresó su voluntad de revisar la política de derechos humanos que se venía implementando, no faltaron las voces, entre ellas las de varios obispos, diciendo que ello era reabrir heridas y en nada aportaba al presente acuciado por graves problemas.

En una lectura política más integral es posible advertir que se apunta más allá de los responsables a las violaciones de los derechos humanos, aunque estos deban, al fin, rendir cuenta de sus crímenes. Lo que se busca atacar es la cultura de la impunidad sobre la que se asienta la corrupción y la inseguridad. Reparar la negación de justicia del último medio siglo también tiene que ver con la renovación de los jueces que se ha iniciado en la Suprema Corte. Los comisarios enriquecidos y la participación de policías en los secuestros, extorsiones y crímenes no son casos aislados, sino resultado de la impunidad con la que actuaron las fuerzas de seguridad desde la época de la dictadura militar hasta estos tiempos de democracia neoliberal.

Una década atrás la sociedad explotó en Catamarca con el crimen de María Soledad y terminó con el feudo de los Saadi y la impunidad de los hijos del poder. Que hoy, en Santiago del Estero, el jefe de Información del gobierno de los Juárez haya sido detenido e imputado por el crimen de las dos jóvenes santiagueñas, es otro hecho de esta naturaleza, más si se tiene en cuenta que el comisario Musa Azar había sido denunciado entre los violadores a los derechos humanos en esa provincia.

Aunque sea en cuentagotas y sin la estridencia que pudieran haber provocado en otros tiempos, los juicios por la verdad histórica contribuirán a sentar las nuevas bases culturales que se necesitan para avanzar en los cambios sociales y políticos que el país requiere. Que los crímenes políticos no queden impunes es una advertencia para los que se empeñan en los crímenes sociales que provoca un modelo de país con injusta distribución de la riqueza. Del mismo modo debe profundizarse la lucha contra la corrupción instalada en buena parte del estamento político, que nunca se mostró entusiasmado en llevar adelante las investigaciones judiciales tanto sobre las violaciones a los derechos humanos, como de los atentados a la AMIA y las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero, que recién ahora se está demostrando que fueron intencionalmente provocadas para ocultar la venta ilegal de armas, como se sospechó desde el primer momento.

Inseguridad, corrupción, impunidad y violaciones a los derechos humanos forman el círculo que se necesita romper para no sólo saldar una deuda histórica sino para poder construir una historia diferente.

Así como pueden señalarse estos pasos posi-

vos hay que insistir en que en lo económico los cambios todavía no se perciben. Según un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA sobre el presupuesto nacional 2004 presentado al Congreso por el Ministro de Economía, se pretende recaudar más sin hacer una reforma impositiva que recargue a los sectores de mayor capacidad contributiva. Y gastar menos para pagar la deuda externa dejando lo que sobra para hacer obras públicas y financiar planes sociales. Por otra parte, la necesidad de asegurar el superavit acordado con el FMI implica no contemplar aumentos salariales para los empleados públicos, con lo que sumado a la inflación del 10 % prevista para el año, se rebaja aún más el poder adquisitivo, lo que a su vez impide aportar a la reactivación del mercado interno, como principal motor de la rueda productiva que lleve a la generación de empleo genuino; y de ese modo apuntar a una redistribución más justa de la riqueza, que debería ser el eje de la política económica argentina, para -entre otras cosas- terminar con el asistencialismo de los planes sociales que han degenerado la cultura del trabajo convirtiéndose en instrumento del denigrante clientelismo político, tanto de los gobernadores e intendentes municipales como de algunas organizaciones sociales o políticas que desarrollan su tarea con los desocupados.

Es cierto que la postura del gobierno nacional condicionando el reclamo de aumento de tarifas de las empresas privatizadas a la revisión y cumplimiento de los contratos, así como la voluntad de modificar las leyes previsionales que permitieron la estafa a miles de argentinos cuya jubilación futura está en la incertidumbre por el rol que han jugado las AFJP, ha contribuido a recuperar en la conciencia ciudadana una concepción del Estado como garante de los derechos básicos, dando por tierra con la panacea de las privatizaciones que impuso el neoliberalismo con la complicidad de políticos, sindicalistas y empresarios.

Tampoco se deja de reconocer que enfrentar al poder económico es la batalla más dura. Pero con el discurso no alcanza. La revisión de los contratos de las privatizadas e incluso la reestatización de los servicios esenciales, así como el retorno al sistema solidario de reparto en lo previsional requieren de la activa participación ciudadana. Si el gobierno no apela al respaldo popular difícilmente logre hacer realidad su discurso. Con ello se fortalecen las pretensiones del FMI. Y así son de desconfiar las invitaciones y elogios del presidente norteamericano Bush, que insiste en incorporar a la Argentina en el ALCA, como nuevo instrumento de dependencia.

En este sentido seguramente tendrá significación la movilización popular que promueven las centrales sindicales del Cono Sur, prevista para el

15 de diciembre en Montevideo, cuando se reúnan los jefes de estado. Será a su vez la oportunidad para reafirmar que el Mercosur no debe limitarse a lo económico sino transformarse en una herramienta para la integración política y cultural de Latinoamérica.

No es bueno para el proceso político argentino dejar todo sólo en manos del gobierno. La sociedad, a través de sus organizaciones, debe asumir una participación más activa, tanto para respaldar lo positivo como para señalar lo negativo y exigir medidas que ataquen de fondo los problemas de la desnutrición infantil, el abandono de los ancianos, el flagelo de la desocupación así como la atención de la salud y la educación de la mayoría empobrecida.

Desde los sectores sociales se debe avanzar en perder el miedo o la desconfianza hacia lo político, involucrándose en las problemáticas colectivas. No basta con el rechazo retórico al neoliberalismo ni con la sola denuncia de los males que se padecen, como en buena medida acostumbra hacer la cúpula eclesiástica, autoasignándose el rol de "custodio moral". Es un imperativo construir nuevas herramientas políticas que canalicen la movilización social, sin caer en los vicios hegemónicos que terminan en las eternas divisiones entre dirigentes padecidas por la gente.

Si el gobierno nacional no muestra iniciativas que promuevan la organización y la movilización social, será la sociedad civil la que deberá imponerle esta necesidad. Porque para la envergadura de los cambios que se necesitan no alcanza el voluntarismo de una persona. Tampoco la sociedad puede descansar en liderazgos providenciales. Caminar hacia un democracia participativa exige tomar conciencia de esta responsabilidad ciudadana. Y la conciencia se fortalece ejercitando los derechos de participación en la definición de las políticas que se relacionan con la vida concreta del pueblo.

Los argentinos necesitamos convencernos que la construcción política no es obra de los políticos. Bastante ya sufrimos las consecuencias de las acciones de quienes han devenido en "clase o dirigencia política". Es la hora de la sociedad. Son tiempos de protagonismo popular. El gobierno debe abrir las puertas a la participación, favoreciendo la organización popular. Los movimientos sociales, surgidos al calor de los reclamos y las necesidades de los últimos veinte años, deben asumir su responsabilidad política. Se trata no sólo de canalizar la movilización de la gente sino de ser capaces de proponer, definir y gestionar las soluciones que el estado debe garantizar.-

Luis Miguel Baronetto  
Noviembre 2003.